

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Argiro de Jesús Ayala Zapata
DEMANDADO	Universidad de Antioquia y Departamento de Antioquia
PROCEDENCIA	Juzgado Doce Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 012 2017 00432 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 280 de 2022
TEMAS Y SUBTEMAS	En convención colectiva de trabajo 1976-1977 suscrita entre la universidad de Antioquia y el sindicato de trabajadores de la entidad, se incorporó el parágrafo tercero del artículo 1º ¿ de la ley 4 de 1976 que habla de un aumento anual de la pensión de jubilación del 15%
DECISIÓN	Revoca y condena

En la fecha, **dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento en grado jurisdiccional de consulta en favor del señor **Argiro de Jesús Ayala Zapata**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario que promoviera contra la **Universidad de Antioquia y el Departamento de Antioquia**. Radicado único nacional 05001 3105 **012 2017 00432** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes

el proyecto estudiado, discutido y aprobado en sala mediante acta **Nº 038**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

Pretende el demandante se declare que, como titular de pensión de jubilación reconocida por la Universidad de Antioquia, tiene derecho al reajuste anual, a partir del 2000, y por los años subsiguientes, con un porcentaje del 15%, peticionando condena por el mismo en forma retroactiva, costas y agencias en derecho.

En sustento indica que estuvo vinculado mediante contrato de trabajo ficto con la Universidad de Antioquia, en calidad de trabajador oficial, entre el 01 de enero de 1970 y el 23 de octubre de 1995 cuando egresó para disfrutar de pensión convencional; que el artículo 15 de la convención colectiva establece: *"A partir de la vigencia de la presente convención, la universidad reconocerá a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación, el subsidio familiar, se beneficiaran de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención, las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares, y para estudio y becas. Igualmente la universidad dará cumplimiento a la ley 4ª de enero 21 de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación."*; que la Ley 4 de 1976, consagró en el artículo 1, el derecho al reajuste anual de las pensiones de jubilación e invalidez, tanto de naturaleza pública como privada y en forma expresa a través del párrafo tercero, fijó el porcentaje mínimo de incremento, indicando que en ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de 5 veces el salario mensual mínimo legal más alto; que para el momento del reconocimiento de la pensión, se encontraba vigente esta cláusula, en virtud de la cual se adoptó la Ley 4 de 1976 como norma convencional, la cual no ha sido modificada, anulada

o sustituida por acuerdos convencionales; que la universidad ha dado cumplimiento a la misma, excepto en relación con el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley 4ª de 1976 referido al porcentaje mínimo de aumento anual de la pensión de jubilación del 15%, sin que la mesada del demandante haya superado en ninguna anualidad el equivalente a cinco salarios mínimos, relaciona los porcentajes que se le han aplicado para el reajuste y la diferencia existente, cuantificando luego la misma. Puntualiza que con escrito del 23 de abril de 2012 formuló reclamación administrativa, en procura de obtener la reliquidación y pago de los reajustes causados desde 2000, siendo resuelta de manera negativa en resolución 142 de 8 de mayo de 2012.

En auto del 02 de junio de 2017, **se admitió y ordenó dar trámite a la acción**, debidamente notificada la entidad accionada, allegó contestación aceptando la vinculación laboral del demandante, el reconocimiento de pensión de jubilación convencional, el contenido de la cláusula 15 de la convención colectiva, precisando que la misma señala que ***la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4 del 21 de enero de 1976***, y ante su derogatoria se debió actuar la norma general. Admite el ajuste a pensiones fijado en la referida norma e igualmente que la U. de A. no aplica tal incremento por encontrarse tal disposición derogada, empleando el aumento dispuesto por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, sin que se adeude diferencia alguna por reajuste pensional. Los demás supuestos son ciertos. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones. **Formuló como excepción previa la de falta de integración del litisconsorcio necesario, y de fondo**, las que denominó: adecuada interpretación de la convención por parte de la Universidad, inexistencia de la obligación de incremento del 15% a cargo de esa entidad, buena fe y prescripción.

En audiencia llevada a cabo el 29 de mayo de 2018, se dispuso vincular al proceso al Departamento de Antioquia, como litisconsorte necesario por

pasiva, entidad que, pese a que le fue notificada la existencia del proceso, no se pronunció frente al mismo, razón por la cual, se tuvo por no contestada la demanda en auto del 22 de octubre de 2018.

La primera instancia **terminó con sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito**, en la que absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra, e impuso costas a cargo del actor.

Argumentó la a quo que el artículo 15 de la Convención Colectiva no incorporó un derecho autónomo al reajuste pensional, pues, refiere el cumplimiento estricto de la Ley 4ta de 1976, norma que fue derogada por el artículo 12 de la Ley 71 de 1988, y esta a su vez por la Ley 100 de 1993, preceptos que fueron analizadas por la Corte Constitucional, concluyéndose que la Ley 4ta no genera ningún efecto a partir de la expedición de la Ley 71, por lo que al no existir duda en cuanto al tenor de la norma, no es dable aplicar el principio indubio pro operario, o de favorabilidad, y con ello convertir el reajuste deprecado en un derecho autónomo y que coexiste con el de la preceptiva vigente que regula dicho concepto.

Al ser la decisión adversa a los intereses del demandante y no haberse interpuesto recurso de apelación, se conoce de la misma en el grado jurisdiccional de consulta en los términos del artículo 69 del C.P.T y la S.S.

En orden a resolver, basten las siguientes,

Consideraciones

Se aceptó por la Universidad de Antioquia la vinculación del demandante como trabajador oficial, entre 1 de enero de 1970 y el 23 de octubre de 1995, reconociéndole en Resolución 11714 la pensión de jubilación

consagrada en la convención colectiva de trabajo, a partir del 24 de octubre de 1995, en cuantía de \$463.461; que la cláusula 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre el sindicato de trabajadores oficiales de la universidad de Antioquia y ésta entidad, no ha sido modificada o sustituida, y que el reajuste aplicado a la pensión que disfruta el accionante ha sido conforme al IPC y no acorde a la Ley 4ª de 1976.

Atendiendo el grado jurisdiccional de consulta, **el problema jurídico** en esta instancia, se circunscribe a establecer si las pensiones de invalidez y jubilación reconocidas por la Universidad de Antioquia, con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, deben reajustarse en los términos indicados en el párrafo 3º del artículo 3º de la Ley 4ª de 1976, o con base en las disposiciones normativas que derogaron la misma y se encontraban vigente para la fecha en que se causó el derecho pensional convencional a favor del actor.

Pues bien, es de indicar que el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, establece:

Artículo décimo cuarto. Pensionados por jubilación.

A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad de Antioquia reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o hubieren cumplido veinte (20) años de servicios a la Universidad, continuos o discontinuos, y que lleguen a una edad de cuarenta y cinco (45) años.

PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad pagará a todos los trabajadores jubilados actualmente y que lleguen a jubilarse, una pensión de jubilación del 100% de su salario.

Artículo décimo quinto. Prestaciones extralegales para pensionados.

A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad reconocerá y pagará a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas.

Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación.

PARÁGRAFO. La mensualidad de que trata el artículo quinto de la Ley 4ª de 1976, corresponde a la prima de navidad que paga la Universidad.

Precepto frente al cual tuvo la oportunidad de pronunciarse la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia SL1149-2022, indicando:

[L]a lectura efectuada por el Tribunal respecto de la cláusula decimoquinta convencional se exhibe desatinada, pues tal estipulación guarda correspondencia con la teleología de la negociación colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso, al permitir que los pensionados de la Universidad al igual que quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, sin que se observe que la intención de los contratantes hubiera sido la de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente.

Se dice lo anterior porque de la norma extralegal fluye razonable que las partes firmantes, haciendo uso de su poder de negociación, hubieren incorporado de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la convención, con el propósito de darles una connotación de derecho extralegal nuevo y autónomo frente a las normas legales.

De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisión a la Ley 4ª de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garantía legal, pero para efectos de incorporarla a éste, tal como sucede con los demás derechos que allí se enlistan conforme la denominación dada por el legislador.

Adicionalmente, en la misma providencia se dijo:

[N]o se advierte que las partes hubieren decidido excluir lo relativo al reajuste allí previsto; o que la norma extralegal únicamente aludiera a los beneficios concernientes a subsidio familiar, distribución de remanentes (capítulo 5 del Acuerdo de 1975), servicio médico familiar, primas de junio y navidad, auxilio de maternidad, útiles escolares y becas para estudio, algunos de los cuales, dicho sea de paso, también se encuentran regulados en la Ley 4ª de 1976, en sus artículos 6, 7 y 9. Nótese, además, que el precepto convencional bajo estudio de manera expresa estableció que: «Igualmente la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación», con lo cual no queda duda que las partes, en ejercicio de su libertad de contratación laboral, válidamente estipularon que los pensionados fueran acreedores --aparte de los beneficios aludidos en precedencia--, del reajuste pensional reclamado.

Entonces, contrario a lo aducido por el Tribunal y alegado por la opositora, el hecho de que en la citada cláusula no se hiciera alusión alguna sobre la vigencia

de la norma legal de referencia, en manera alguna podía conducir a concluir que la misma estuviera atada a la derogatoria, subrogatoria o demás situaciones que afectan la vigencia de la ley en el tiempo, en este caso, de la citada Ley 4ª de 1976, por ser claro que, incorporada la norma legal al texto convencional, ésta queda sujeta, no a las accidentalidades que afectan su lugar de origen, que no es más que un marco de referencia, se repite, sino a las propias de la vigencia de las preceptivas convencionales, pues deja de ser norma legal para los convencionistas, para convertirse en norma convencional propia de sus relaciones contractuales de trabajo. Este es el cabal entendimiento que debe darse a la vigencia de la norma convencional cuando su contenido tiene venero o fuente en una norma legal, como ocurre en este caso.

En esas condiciones, acoger por vía convencional un reajuste no inferior al 15%, conforme lo establecido en la referida normativa, se enmarca dentro de la voluntad contractual de las partes, producto de su autonomía, frente a la cual no le es dable a la Corte entrometerse, pues acorde con lo asentado en la sentencia SL3820-2020, «en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atente contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesión a la Constitución o la ley».

Finalmente, cumple acotar que los incrementos pretendidos por el recurrente constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues aquél se encuentra pensionado desde el año 1997, a través de la Resolución n.º 14702 del 24 de octubre de esa anualidad (folios 432 a 433 del cuaderno (2) del Juzgado), con venero en la Convención Colectiva de Trabajo 1976 – 1977 y, como quedó visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que ésta siguió rigiendo dichos beneficios por virtud de lo establecido en el plurimencionado acuerdo colectivo.

Posición que ha sido reiterada en las sentencias SL1597-2022, SL1696-2022, SL1731-2022, SL1945-2022, SL2201-2022, SL2407-2022, SL2508-2022, SL2840-2022, y SL3467-2022.

Teniendo en cuenta este precedente, debe indicarse que si bien la Sala venía sosteniendo, en procesos de idénticas características al presente, la tesis de la imposibilidad de reajustar la mesada pensional de los trabajadores oficiales de la Universidad de Antioquia, por considerar que la Convención colectiva no incorporó la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que ante el criterio vigente en el órgano de cierre, se cambia la postura, para proceder a su acatamiento en virtud de la doctrina probable, y así concluir

que las partes haciendo uso de su poder de negociación, el cual procura el mejoramiento de las condiciones laborales, incorporaron de manera generalizada un listado de derechos legales a la convención, con el propósito de darles una connotación de derecho extralegal nuevo y autónomo frente a las normas, plasmándose ello en la cláusula 15 del acuerdo convencional, el cual le permite a los pensionados de la Universidad bajo tal regulación, acceder a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, sin que se desprenda de la misma que la voluntad de las partes hubiese sido limitar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente, esto es, que la misma quedara ligada a las derogatoria, subrogatoria o demás situaciones que afectan la vigencia de la Ley 4ª de 1976 en el tiempo, **ya que, incorporada la norma legal al texto convencional, esta queda sujeta al vigor de las preceptivas convencionales, al dejar de ser norma legal y convertirse en extralegal.**

De acuerdo con ello, los incrementos debatidos tienen la connotación de derecho adquirido, al haber consolidado el actor su estatus de pensionado con fundamento en las previsiones de la Convención Colectiva de Trabajo 1976 – 1977, sin que sufra afectación a raíz de la expedición del Acto legislativo 01 de 2005, en tanto para el momento de su vigencia, ya tenía un derecho reconocido, al haberse otorgado la pensión en Resolución 11714 del 12 de diciembre de 1995, asistiéndole así, derecho a que su prestación sea reajustada en un monto no inferior al 15%, pues, como quedó visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, esta siguió rigiendo dichos beneficios por virtud de lo establecido en la convención colectiva, la cual, desde que se pactó entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de tal acuerdo, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.

Antes de realizar los cálculos a fin de establecer cuanto se le adeuda al actor, es de indicar que este elevó **petición de reajuste de la pensión de jubilación el 23 de abril de 2012**, siendo **resuelta de manera negativa a través de Resolución 142 del 8 de mayo de 2012**, notificada el 16 del mismo mes y año, decisión frente a la cual interpuso **recurso de reposición y en subsidio apelación, desatado, el primero, en acto administrativo 242 del 1 de no junio de 2012 y, el segundo, en resolución 34983 del 9 de julio de 2012**, presentándose la demanda el 19 de abril de 2017, luego, es claro según lo dispuesto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, **que operó el fenómeno extintivo de la prescripción respecto a los reajustes de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 19 de abril de 2014**, razón por la cual, se declara probada parcialmente la excepción de prescripción oportunamente formulada por la Universidad de Antioquia, adeudándosele al actor, **entre el 19 de abril de 2014 y el 30 de noviembre de 2022, la suma de \$30.836.163,46**, tal y como se advierte en cuadro adjunto al acta. A partir del 1º de diciembre de 2022, la mesada pensional a reconocer no podrá ser inferior a \$3.080.807,45, sin perjuicio, del aumento anual, contemplado en la convención colectiva de trabajo.

El valor a cancelar por concepto de retroactivo por reajuste, deberá ser actualizado mediante la figura de la indexación hasta la data en que efectivamente se verifique el pago total de la obligación, ello, atendiendo lo establecido en los artículos 48 y 53 superiores, el principios de equidad y justicia, adicional a que es el criterio actual de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en aras del restablecimiento de su poder adquisitivo, depreciado por efectos del fenómeno inflacionario que permea la economía nacional.

Para la liquidación de la indexación se atenderá la siguiente fórmula: $VA = VH \times (IPCF/IPCI)$, en la cual VA es igual al Valor actualizado, VH, es cada una de las mesadas pensionales debidas, IPC Final, es, el índice de precios al consumidor correspondiente al mes en el que se efectuará el pago, y el IPC Inicial, es el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de causación de cada una de las mesadas pensionales a favor del demandante. (véase, entre otras, las sentencias SL2421 de 2021 y SL359-2021.

Sin costas en ninguna de las instancias, al reconocerse la prestación por un cambio jurisprudencial efectuado con posterioridad a la presentación de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca** la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Argiro de Jesús Ayala Zapata** en contra de la **Universidad de Antioquia y el Departamento de Antioquia**, **para en su lugar:**

PRIMERO: Condenar a la **Universidad de Antioquia**, a reconocer y pagar al señor **Argiro de Jesús Ayala Zapata**, la suma de **\$30.836.163,46**, por concepto de reajuste pensional causado entre el **19 de abril de 2014 y el 30 de noviembre de 2022**. A partir del 1º de diciembre de 2022, la mesada pensional no podrá ser inferior a **\$3.080.807,45**, sin perjuicio, del aumento anual, contemplado en la convención colectiva de trabajo.

La **Universidad de Antioquia**, deberá indexar, cada una de las mesadas pensionales adeudadas, a partir del 19 de abril de 2014 y hasta la fecha de su pago efectivo, con la fórmula expuesta en la parte motiva.

SEGUNDO: Se declara probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta frente a los reajustes causados con anterioridad al 19 de abril de 2014.

Sin costas en ambas instancias atendiendo el cambio jurisprudencial frente al tema.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijará por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

AÑO	% AUMENTO	VALOR MESADA RECONOCIDA POR UDEA	AUME NTO 15%	SALARIO CON AUMENTO 15%	DIFERENCIA	NO. MESA DAS	VALOR ADEUDADO
1995	19,46%		15%				
1996	21,63%	\$ 553.835,00	15%	\$ 553.835,00	\$ -		
1997	17,68%	\$ 673.629,00	15%	\$ 673.629,00	\$ -		
1998	16,70%	\$ 792.726,00	15%	\$ 792.726,00	\$ -		
1999	9,23%	\$ 925.111,00	15%	\$ 925.111,24	-		
2000	8,75%	\$ 1.010.499,00	15%	\$ 1.063.877,65	\$ 53.378,65		\$ -
2001	7,65%	\$ 1.098.917,00	15%	\$ 1.162.073,85	\$ 63.156,85		\$ -
2002	6,99%	\$ 1.182.985,00	15%	\$ 1.263.754,55	\$ 80.769,55		\$ -
2003	6,49%	\$ 1.265.675,00	15%	\$ 1.360.432,75	\$ 94.757,75		\$ -
2004	5,50%	\$ 1.347.818,00	15%	\$ 1.455.526,25	\$ 107.708,25		\$ -
2005	4,85%	\$ 1.421.947,00	15%	\$ 1.549.990,70	\$ 128.043,70		\$ -
2006	4,48%	\$ 1.490.912,00	15%	\$ 1.635.239,05	\$ 144.327,05		\$ -
2007	5,69%	\$ 1.557.705,00	15%	\$ 1.714.548,80	\$ 156.843,80		\$ -
2008	7,67%	\$ 1.646.339,00	15%	\$ 1.791.360,75	\$ 145.021,75		\$ -
2009	2,00%	\$ 1.772.614,00	15%	\$ 1.893.289,85	\$ 120.675,85		\$ -
2010	3,17%	\$ 1.808.067,00	15%	\$ 2.038.506,10	\$ 230.439,10		\$ -
2011	3,73%	\$ 1.865.383,00	15%	\$ 2.079.277,05	\$ 213.894,05		\$ -
2012	2,44%	\$ 1.934.962,00	15%	\$ 2.145.190,45	\$ 210.228,45		\$ -
2013	1,94%	\$ 1.982.176,00	15%	\$ 2.225.206,30	\$ 243.030,30		\$ -
2014	3,66%	\$ 2.020.631,00	15%	\$ 2.279.502,40	\$ 258.871,40	10,4	\$ 2.692.262,56
2015	6,77%	\$ 2.094.587,00	15%	\$ 2.323.725,65	\$ 229.138,65	14	\$ 3.207.941,10
2016	5,75%	\$ 2.236.391,00	15%	\$ 2.408.775,05	\$ 172.384,05	14	\$ 2.413.376,70
2017	4,09%	\$ 2.364.984,00	15%	\$ 2.571.849,65	\$ 206.865,65	14	\$ 2.896.119,10
2018	3,18%	\$ 2.461.712,00	15%	\$ 2.719.731,60	\$ 258.019,60	14	\$ 3.612.274,40
2019	3,80%	\$ 2.539.995,00	15%	\$ 2.830.968,80	\$ 290.973,80	14	\$ 4.073.633,20
2020	1,61%	\$ 2.636.515,00	15%	\$ 2.920.994,25	\$ 284.479,25	14	\$ 3.982.709,50
2021	5,62%	\$ 2.678.963,00	15%	\$ 3.031.992,25	\$ 353.029,25	14	\$ 4.942.409,50
2022		\$ 2.829.521,00	15%	\$ 3.080.807,45	\$ 251.286,45	12	\$ 3.015.437,40
TOTAL ADEUDADO							\$ 30.836.163,46